



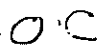
NUE 7-ADP-2019 (RC)

[REDACTED] contra el Ministerio de Economía (MINEC)

Resolución Definitiva

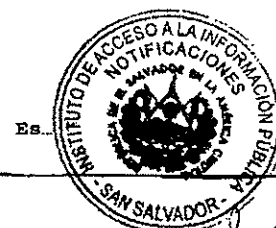
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA: San Salvador, a las diez horas con diecinueve minutos del dieciocho de octubre de dos mil diecinueve.

A. Descripción del Caso

I. [REDACTED], en adelante la apelante, presentó ante la Dirección de  Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana del **Ministerio de Economía (MINEC)** solicitud de datos personales conforme al Art. 36 letra "a" de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), relativa a: "copias certificadas de memorandos, correos y/o acuerdos ministeriales que sustenten las acciones realizadas durante la actual administración de la Doctora Luz Estrella Rodríguez, como Ministra de Economía, en el sentido de cumplir las recomendaciones dadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ante la violación a sus derechos laborales y a la libertad sindical".

En relación con ello, la oficial de información del **MINEC** resolvió entregar nota de referencia DM/C026/2019 emitida por la Unidad de Asesoría y Coordinación, suscrita por Regina María Díaz, en la que hace constar que las recomendaciones emitidas por la PDDH, fueron dirigidas al Ministro en funciones, en ese momento; por tanto, no se procedió a realizar ninguna gestión, ya que a la fecha, el Despacho Ministerial no ha recibido por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos ninguna recomendación de seguimiento sobre su caso.

II. La apelante interpuso el recurso de apelación ante este Instituto conforme al Art. 38 de la LAIP, el cual fue admitido, designándose al Comisionado **René Eduardo Cárcamo**, para instruir el procedimiento y elaborar un proyecto de resolución.



En plena observancia y respeto al Derecho de Defensa que debe imperar en todo procedimiento, de conformidad con el artículo 88 de la LAIP, se corrió traslado al MINEC para que rindiera su informe. En dicho informe, el MINEC —en lo medular—, a través de su apoderado general judicial con facultades especiales Daniel Roberto Rios Pineda, adjuntó la documentación siguiente: “a) acuerdo 1196 ejecutivo en el ramo de economía de fecha 21 de septiembre de 2018, en la Dirección de Asuntos Jurídicos; b) nota de fecha 24 de septiembre de 2018 con referencia R-H N° 60 en la Gerencia de Recursos Humanos; y, c) escrito de fecha 3 octubre de 2018 del Director General de Presupuesto del Ministerio de Hacienda con referencia N° 1520 en el Despacho Ministerial, debidamente certificadas”.

III. La audiencia oral, se desarrolló únicamente con la comparecencia del apoderado del ente obligado, el licenciado José Manuel Rodríguez Rubio, y se hizo constar la incomparecencia de la apelante, pese a haber sido legalmente notificada.

En este acto, se corrió traslado al MINEC del escrito presentado por la apelante el 17 de julio de este año, por medio del cual solicitó la reprogramación de esta audiencia y solicitó lo siguiente: “1) que este Instituto, actúe de oficio ante la sospecha fundamentada del cometimiento de una falta grave según contempla la LAIP, cuya responsable directa sería Regina Díaz; 2) se realice investigación de oficio que también abarque la actuación de la ex ministra de economía, doctora Luz Estrella Rodríguez y a Guadalupe Turcios de Salazar, quien aún funge como Gerente de Recursos Humanos; 3) se apliquen las sanciones contempladas en la ley a los funcionarios que resulten responsables de infringir la LAIP; 4) se le proporcione autenticada la información que este Instituto le envió por correo, ya que esa fue su petición final; y, 5) se proporcione la información adicional que detalla en el mismo escrito”.

En relación a la documentación incorporada por el MINEC en su informe de defensa manifestó a través de su apoderado que su finalidad, se encontraba relacionada con la petición original de la apelante, consistente en las gestiones que había hecho la doctora Luz Estrella Rodríguez, ex ministra de economía, para dar cumplimiento al recomendatorio que hizo que la Procuraduría para la defensa de los Derechos Humanos (PDDH), pues con tal documentación se demuestran las acciones que el MINEC, había efectuado, siendo estas: la emisión del acuerdo, la gestión por medio de recursos humanos ante el Ministerio de Hacienda (MH) y la respuesta que se tuvo por parte del MH a la petición del MINEC. Dichas actuaciones fueron las únicas

realizadas durante el periodo de la doctora Luz Estrella Rodríguez. En ese sentido, los documentos se admitieron como prueba por considerarse útiles y pertinentes.

En etapa de alegatos, el MINEC a través de su apoderado expuso que en el informe de defensa se remitió la información objeto de controversia la cual constaba de un acuerdo, una nota de remisión que hizo recursos humanos para el MH y la respuesta brindada por el MH en cuanto a la contratación nuevamente de [REDACTED] O.C

Respecto al escrito presentado por la apelante el 17 de julio de este año, agregó que al solicitar la investigación de algunos funcionarios y servidores públicos se excede de su petición original y que la misma, debía ventilarse en la instancia correspondiente; finalmente agregó que el MINEC emitió un acuerdo en donde se ordenaba nuevamente la contratación de la apelante. El procedimiento para ello, es solicitar primero al MH y después emitir el acuerdo; sin embargo, al final la ex ministra desistió de contratar nuevamente a la apelante, haciendo caso omiso a lo que el MH y no continuo con el sistema de contratación. O.

B. Análisis del caso:

Una vez establecido lo anterior, el examen del caso seguirá el orden lógico siguiente: (I) consideraciones sobre la protección de datos personales; (II) análisis de las causales por las cuales se puede considerar la información como inexistente, (III) procedencia de lo solicitado por la apelante; para finalmente, (IV) analizar sobre el inicio de un procedimiento sancionatorio en contra de las personas señaladas por la apelante en su escrito presentado el 17 de julio de este año.

I. De acuerdo a la resolución definitiva emitida por este Instituto en fecha 9 de marzo de 2018, en el procedimiento de imposición de sanciones de referencia NUE 3-DDP-2017, por dato personal se entiende toda aquella información relativa a un individuo identificado o identificable que, entre otras cosas, le dan identidad, lo describen, precisan su origen, edad, lugar de residencia, trayectoria académica, laboral o profesional. Asimismo, señalan aspectos sensibles o delicados sobre tal individuo, como es el caso de su domicilio, teléfono, sus características físicas, ideología o vida sexual, entre otros¹.

¹ Concepto retomado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de los Datos Personales de los Estados Unidos Mexicanos (INAI), en su resolución de fecha 1 de febrero de 2017, de referencia RRA 3995/16.



A. Asimismo, el Art. 31 de la LAIP establece que el derecho a la protección de datos personales, consiste en que: *“Toda persona, directamente o a través de su representante, tendrá derecho a saber si se están procesando sus datos personales; a conseguir una reproducción inteligible de ella sin demora; a obtener las rectificaciones o supresiones que correspondan cuando los registros sean injustificados o inexactos y a conocer los destinatarios cuando la información sea transmitida, permitiéndole conocer las razones que motivaron su petición, en los términos de esta ley. El acceso a los datos personales es exclusivo de su titular o su representante”* (la negrita es nuestra).

En ese orden de ideas, la Sala de lo Constitucional en la Sentencia Definitiva de Amparo del día 4 de marzo de 2012 de referencia 934-2007, reconoció que la protección de los datos personales es el medio por el cual se salvaguarda los objetivos de la faceta material del derecho a la autodeterminación informativa, por un conjunto de derechos subjetivos, deberes, principios, procedimientos, instituciones y reglas objetivas, teniendo este su fundamento en la seguridad jurídica Art. 2 de la Constitución de la República (Cn); asimismo, estableció que la protección de este derecho, pretende satisfacer la necesidad de las personas de preservar su identidad ante la revelación y el uso de los datos que les conciernen, y que este no puede limitarse a determinado tipo de datos —sensibles o íntimos—; lo decisivo es la utilidad y el tipo de procesamiento que de los mismos se haga, pues se requiere conocer el contexto en que se utiliza o se pretenda utilizar.

Por ello, el grado de sensibilidad o intimidad del dato personal ya no depende si afecta o no la esfera íntima o privada de la persona; hace falta conocer la relación de utilización de un dato para poder determinar sus implicaciones con el individuo; es decir, determinar la verdadera finalidad y qué posibilidades de interconexión y de utilización existen; solo así se podrá descifrar la licitud de las restricciones al derecho a la autodeterminación informativa o protección de datos personales.

Este derecho también se encuentra reconocido en los tratados de derechos humanos que forman parte del orden jurídico salvadoreño, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 12), el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Art. 17), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Art. 11) y la Convención sobre los Derechos del Niño (Art. 16), al interpretar estas disposiciones, los Organismos Internacionales han destacado la noción de las garantías respecto de los registros personales y corporales, las

relacionadas con la recopilación y registro de información personal en bancos de datos y otros dispositivos.

B. Por otro lado, es pertinente señalar que dentro de esos derechos subjetivos que componen el derecho a la protección de datos personales, se encuentra el derecho de acceso (Art. 36 letras “a”, “b” y “c” de la LAIP), que de acuerdo a la jurisprudencia constitucional², es la *“facultad que implica la posibilidad de comprobar si se dispone de información sobre uno mismo y conocer el origen del que procede y la finalidad que se persigue”*. OC

Es importante señalar, que el tratamiento de datos personales es cualquier operación o procedimiento técnico, automatizado o no, que permita la recopilación, registro, organización, almacenamiento, conservación, elaboración, modificación, extracción, consulta, utilización, bloqueo, supresión, comunicación por transparencia o por difusión, o cualquier otra forma de procesamiento que facilite el acceso, correlación o interconexión de datos personales. Este en principio, depende del conocimiento y consentimiento del titular del dato personal; sin embargo, existen excepciones legales a esos presupuestos.

II. Sobre este punto, es importante aclarar que si bien la oficial de información del MINEC, no resolvió declarando inexistente lo solicitado, la apelante argumento en su escrito de apelación que su inconformidad radicaba en que a su criterio lo resuelto por parte del ente obligado, es falso pues cuenta con documentos otorgados por la Oficina de Información y Respuesta (OIR) del MH, en donde se establece que si existen trámites sobre su petición.

Lo anterior en atención a que, la oficial de información del MINEC, entregó a la apelante, memorando de referencia DM/C026/2016, emitido el 18 de enero de este año, por la Unidad de Asesoría y Coordinación, en donde se informa que las recomendaciones emitidas por la PDDH, fueron dirigidas al ministro en funciones en ese momento; por lo que, no se ha procedido a realizar ninguna gestión, asimismo, a la fecha el despacho ministerial no ha recibido por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos ninguna recomendación de seguimiento sobre el caso.

En ese contexto, resulta oportuno realizar unas breves consideraciones respecto a la inexistencia en los términos establecidos en la LAIP, de acuerdo a lo establecido en el Art. 73 de la LAIP, cuando la información solicitada no se encuentra en los archivos de la unidad

² Sentencia Definitiva emitida por la Sala de lo Constitucional, en el Amparo del día cuatro de marzo de 2012 de referencia 934-2007.



administrativa correspondiente, **el oficial de información tomará las medidas pertinentes para localizarla en la dependencia** y en caso de no encontrarla expedirá una resolución que confirme su inexistencia.

Este Instituto ya ha reconocido como causales que pueden dar lugar a la inexistencia de la información, las siguientes: a) que nunca se haya generado el documento respectivo; b) que el documento se encuentre en los archivos del ente obligado pero se haya destruido por su antigüedad, fuerza mayor o caso fortuito y c) que la información haya estado en los archivos de la dependencia o entidad y la inexistencia se derive de su destrucción. En este caso deberá verificarse si ésta se realizó de conformidad con las disposiciones vigentes en ese momento, o bien, si la destrucción se hizo de manera arbitraria³.

En ese sentido, la inexistencia de la información decretada por los entes obligados, no debe ser utilizada como un límite al DAIP o al acceso a Datos Personales de los solicitantes de información, pues deben probar que han realizado las diligencias necesarias para su obtención o reconstrucción y futura entrega de la información.

III. Ahora bien, es preciso analizar los elementos vertidos en el presente procedimiento, para determinar si la respuesta brindada por la oficial de información del MINEC, se encuentra conforme a lo establecido en la LAIP.

A. De acuerdo, al expediente administrativo remitido por parte del ente obligado la oficial de información del MINEC, admitió la solicitud de información de la apelante, el 3 de enero de este año; posteriormente, el 16 de ese mismo mes y año, señaló una ampliación de plazo para dar respuesta y en esa misma fecha requirió la información a la Coordinadora de la Unidad de Asesoría y Coordinación del MINEC, quien le manifestó que no se ha procedido a realizar ninguna gestión y que el despacho ministerial no ha recibido por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, ninguna recomendación de seguimiento del caso.

No obstante lo anterior, en su informe justificativo el MINEC a través de su apoderado a efecto de dar cumplimiento a lo requerido por la apelante incorporó la documentación siguiente:

³ Resolución Definitiva IAIP 39-A-2013, del 28 de octubre de 2013.

a) Acuerdo 1196 ejecutivo en el ramo de economía de fecha 21 de septiembre de 2018, en la Dirección de Asuntos Jurídicos. En este documento se evidencia que durante la gestión de la ex ministra de salud, Luz Estrella Rodríguez, se emitió este acuerdo, suscrito por Julián Ernesto Salinas Ventura, Viceministro de Economía y encargado del despacho ministerial por medio del cual, se acordó restituir a [REDACTED], en el encargo de Especialista de Genero del MINEC a partir del 1 de octubre de 2018.

b) Nota de referencia R-H N° 60, emitida el 24 de septiembre de 2018, por Julián Ernesto Salinas Ventura, Viceministro de Economía y encargado del despacho ministerial dirigida al Director General del Presupuesto, por medio del cual, solicitó autorización para la creación de tres plazas, entre ellas, la concerniente a la apelante.

c) Escrito de fecha 3 de octubre de 2018, emitido por el Director General de Presupuesto del MH, por medio del cual se devuelve la nota de referencia R-H N° 60 (descrita en el literal anterior), a efecto de ratificar nuevamente la petición en caso de estimarlo conveniente.

En ese sentido, en relación a la documentación solicitada por la apelante, ha quedado probado en este procedimiento que durante la gestión de la ex ministra de economía, se emitió un acuerdo por Julián Ernesto Salinas Ventura, Viceministro de Economía y encargado del despacho ministerial por medio del cual, se acordó restituir a [REDACTED], en el encargo de Especialista de Genero del MINEC a partir del 1 de octubre de 2018.

De lo anterior, se corrió traslado a la apelante, quien manifestó que no se encontraba satisfecha con la documentación incorporada por el MINEC por las razones siguientes: “i) la licenciada Laura Quintanilla Arias, oficial de información del MINEC, indique: ¿A qué funcionarios de ese Ministerio envió mi petición original y cuál fue la repuesta de cada una de ellas?; ii) ¿Cuál fue la marginación dada por la Exministra Luz Estrella Rodríguez a la nota enviada por el MH, debe haber dado alguna indicación a sus funcionarios?; (iii) ¿Cuáles son las acciones que realizó la Gerente de Recursos Humanos Guadalupe Turcios de Salazar para garantizar su contratación?”.

Asimismo, manifestó que la referida información demuestra que la respuesta inicial dada por la entonces jefa de asesores Regina Díaz oculto la información solicitada. Ante ello, solicitó “1) que este Instituto, actúe de oficio ante la sospecha fundamentada del cometimiento de una falta grave según contempla la LAIP, cuya responsable directa sería Regina Díaz; 2) se realice



investigación de oficio también abarque la actuación de la ex Ministra de Economía, Doctora Luz Estrella Rodríguez y a Guadalupe Turcios de Salazar, quien aún funge como Gerente de Recursos Humanos; 3) se apliquen las sanciones contempladas en la ley a los funcionarios que resulten responsables de infringir la LAIP; 4) se le proporcione autenticada la información que este Instituto le envió por correo, ya que esa fue su petición final; y, 5) se proporcione la información adicional que detalla en el mismo escrito”.

B. Al respecto, tal y como se mencionó en la letra B, relativa al orden lógico del caso, las peticiones de la apelante relacionadas con el inicio de un procedimiento sancionatorio a los funcionarios y servidores públicos señalados se conocerán en el siguiente romano de esta resolución.

Ahora bien, la apelante manifestó en el escrito presentado el 17 de julio de este año, su inconformidad con la información adjunta al informe justificativo del MINEC, ya que en la misma se encontraba incompleta y requirió le sea entregada la información adicional.

Sobre la inconformidad expresada por la apelante, es necesario retomar el objeto de controversia de este caso; es decir, la información que en un primer momento requirió la apelante ante la Dirección de Transparencia Acceso a la Información y Participación Ciudadana del MINEC, según consta en el expediente administrativo remitido por el ente obligado, la apelante solicitó: “copia certificadas de memorandos, correos y/o acuerdos ministeriales que sustenten las acciones realizadas durante la actual administración de la Doctora Luz Estrella Rodríguez, como Ministra de Economía, en el sentido de cumplir las recomendaciones dadas por la PDDH, ante la violación a sus derechos laborales y a la libertad sindical”.

En ese sentido, las preguntas formuladas por la apelante, en su escrito presentado el 17 de julio de este año, modifican el objeto de controversia conocido en este caso, por lo que, su conocimiento dentro de este procedimiento vulneraría el *principio de preclusión procesal* establecido en el Art. 143 del Código Procesal Civil y Mercantil (CPCM), en relación con el Art. 92 de la misma norma de aplicación supletoria en este procedimiento, según lo dispuesto en el Art. 102 de la LAIP, el cual hace referencia a la formalidad de tiempo y oportunidad que tienen las partes para realizar actuaciones, en diferentes etapas del procedimiento, ello en atención a otros principios como el de contradicción y lealtad procesal Art. 4 CPCM.

En cuanto a ello, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), sostiene: “el proceso está compuesto de una serie de fases que contienen, cada una, actos propios e irrepetibles en etapas posteriores o diferentes. Así, conforme el principio de preclusión procesal, las partes pierden o ven extinguida una facultad procesal para actuar cuándo ésta no fue ejercida en tiempo, es decir, en la fase del proceso destinada para ello. El fundamento de tal principio, se encuentra en el orden consecutivo del proceso, categoría que alude a la especial disposición en que se han de desarrollar los actos procesales”.⁴

En esa línea, las preguntas expuesta por la apelante, en su escrito presentado el 17 de julio de este año, debieron ser formuladas en su solicitud de información presentada a la oficial de información el 23 de enero de este año, para ser objeto de conocimiento en este procedimiento, pues conocer de ellas, ampliaría el objeto de la controversia sobre el cual verso su admisión e iría en detrimento de los principios procesales antes mencionados. Sin embargo, la apelante puede formular tales interrogantes al ente obligado mediante una nueva solicitud de información o en su caso haciendo uso de su derecho de petición y respuesta.

Por otro lado, la apelante expuso que no se encontraba conforme con lo brindado por el MINEC, para dar cumplimiento a su solicitud de información pues consideraba que faltaba información.

Respecto a ello, es importante mencionar que en la respuesta emitida por parte de la oficial de información se le proporcionó a la apelante, el memorando emitido por la Unidad de Asesoría y Coordinación del MINEC, en donde se comunicaba que no se había procedido a realizar ninguna gestión, ya que a la fecha el despacho ministerial no había recibido por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos, ninguna recomendación de seguimiento sobre su caso. Asimismo, no consta en el expediente administrativo que la oficial haya solicitado la información a otras unidades administrativas que pudiesen tenerla. Por lo que, no existe certeza que lo entregado durante la tramitación de este procedimiento es la única información existente de lo solicitado por la apelante.

En ese sentido, resulta oportuno ordenar diligencias de búsqueda, de la información concerniente al cumplimiento de las recomendaciones realizadas por la PDDH al MINEC, si

⁴ Resolución definitiva emitida el 19 de abril de 2017, por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, en el proceso de ilegalidad de referencia 205-2005.



como resultado de la búsqueda se encuentra más información ésta deberá ser entregada a la apelante en la modalidad solicitada, en caso de no encontrarse, realizar más acciones de búsqueda durante la administración de la doctora Luz Estrella Rodríguez como Ministra de Economía. Para cumplir tales recomendaciones de la PDDH, la oficial de información del MINEC, deberá de expedir la resolución en la cual haga constar la búsqueda realizada y el resultado de la misma, entregándose a la apelante, la información incorporada en el informe de ley del MINEC de manera certificada.

IV. Finalmente, la apelante también requirió en su escrito de fecha 17 julio de este año, lo siguiente: 1) que este Instituto, actué de oficio ante la sospecha fundamentada del cometimiento de una falta grave según contempla la LAIP, cuya responsable directa sería Regina Díaz; 2) se realice investigación de oficio donde también abarque la actuación de la ex ministra de economía, Doctora Luz Estrella Rodríguez y a Guadalupe Turcios de Salazar, quien aún funge como Gerente de Recursos Humanos; 3) se apliquen las sanciones contempladas en la ley a los funcionarios que resulten responsables de infringir la LAIP”.

Atendiendo a lo anterior, este Instituto considera oportuno realizar las siguientes consideraciones: en primer lugar debe hacerse referencia a la apertura de incidentes sancionatorios en las apelaciones que establece la LAIP como una forma de activación de las competencias del Instituto, a fin de establecer la concurrencia de los supuestos que determine la infracción y de verse verificados, imponer las sanciones correspondientes. Dicha competencia puede activarse de dos formas según lo establecido en el Art. 89 de la LAIP; de oficio cuando el comisionado designado encontrare los elementos necesarios para atribuir a un servidor público la presunta comisión de una infracción y por denuncia escrita de cualquier persona, en el cual se expondrá en detalle los hechos constitutivos de la infracción a la ley y se anexara las pruebas que tuviere en su poder.

En ese contexto, este Instituto advierte que no se cuentan con los elementos suficientes para iniciar un procedimiento sancionatorio en contra de los funcionarios y servidores públicos señalados por la apelante, pues su inicio requiere los elementos antes relacionados, no bastando la mera sospecha a la que hizo referencia. Sin embargo, ello no significa que posteriormente la apelante, puede presentar denuncia en contra de los citados servidores conforme a la normativa legal vigente, y reuniendo los elementos previstos en el Art. 150 de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Decisión del Caso.

a) **Modificar** la resolución emitida por la oficial de información del **Ministerio de Economía (MINEC)** el 21 de enero de este año.

b) **Ordenar** a la titular del **MINEC**, que en el plazo de **ocho días hábiles** contados a partir del día hábil siguiente a la notificación de esta resolución, realicen lo siguiente: una nueva búsqueda de memorandos, correos y/o acuerdos ministeriales que sustenten las acciones realizadas durante la administración de la doctora Luz Estrella Rodríguez como ministra de economía, en el sentido de cumplir las recomendaciones dadas por la PDDH ante la violación a los derechos laborales y a la libertad sindical de la apelante, y que no se limite a un solo registro, sino a otros archivos que objetivamente pueden resguardar la documentación. Esas diligencias deberán realizarse con el Jefe de Gestión Documental y Archivo. En el caso de no encontrarse más información, se deberá de hacer constar en un acta en donde conste tal búsqueda. Finalmente, es preciso manifestar que conforme a los hechos que surjan en las diligencias ordenadas, la Unidad de Cumplimiento establecerá la pertinencia de notificar a otras entidades estatales, para que determinen cualquier tipo de responsabilidad por parte del personal encargado de resguardar esa documentación.

c) **Ordenar** al **MINEC**, que en el plazo de **tres días hábiles** vencido el termino anterior, a través de su oficial de información, entregue a [REDACTED], la información solicitada; y en el caso de no encontrarla, deberá entregar la **declaratoria de inexistencia junto con todas las diligencias de búsqueda**.

d) **Requerir** a la titular del **MINEC** que en el plazo de **veinticuatro horas**, luego de fenecido el plazo estipulado en la letra c) de esta parte resolutive, remita a este Instituto el informe de cumplimiento de la presente resolución. Este informe también podrá ser remitido vía electrónica a la dirección: **oficialreceptor@laip.gob.sv**.

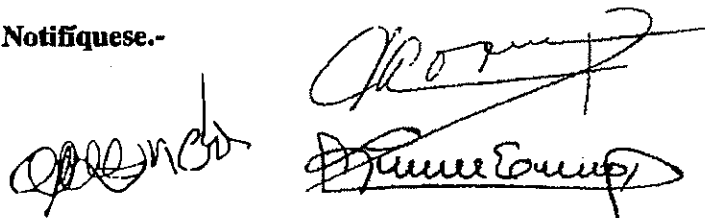
e) **Remitir** el presente expediente a la Unidad de Cumplimiento de este Instituto para que verifique la eficacia de esta resolución y lo ordenado en los literales "b" "c" y "d" de la parte resolutive de este acto administrativo definitivo.

f) **Hacer saber** a las partes que contra este acto administrativo no cabe recurso en esta sede administrativa, de conformidad con el Art. 131 de la Ley de Procedimientos Administrativos,

dejando expedito el derecho de acudir a la jurisdicción Contencioso Administrativo, si así se considerase necesario.

g) Publíquese esta resolución, oportunamente.

Notifíquese.-



PRONUNCIADA POR LOS COMISIONADOS Y LAS COMISIONADAS QUE LA SUSCRIBEN.

DR/CT/IC

...conforme a su original, con la cual se confrontó y para que lo proveído por este Instituto tenga su debido cumplimiento, se extiende la presente, a los un días del mes de noviembre de dos mil diecinueve.



José Augusto Hernández Funes
NOTIFICADOR
IAIP

